

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501020180028601
Proceso:	Ordinario
Demandante:	JORGE ALONSO SOLORZANO SANCHEZ
Demandado:	COLPENSIONES, PROTECCION S.A.
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	29 DE JULIO DE 2022
Decisión:	CONFIRMA, MODIFICA Y ADICIONA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 01 de agosto de 2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	JORGE ALONSO SOLORZANO SÁNCHEZ
DEMANDADAS	COLPENSIONES y PROTECCIÓN S. A
ORIGEN	Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001-31-05-010-2018-00286-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JORGE ALONSO SOLORZANO SÁNCHEZ contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, y PROTECCIÓN S.A.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

El señor Jorge Alonso Solorzano Sánchez formula demanda contra Colpensiones y Protección S.A., pretendiendo se declare: **i)** la nulidad o ineficacia del traslado efectuado a Protección S.A., por vicio en el consentimiento, y por tal razón, que su afiliación al RPM es válida, vigente y sin solución de continuidad. En consecuencia, de lo anterior se condene a **ii)** Protección S.A. a trasladar a Colpensiones todos y cada uno de los aportes efectuados por el demandante al RAIS, incluidos los rendimientos financieros, sin descuento de cuota de administración; y a **iii)** Colpensiones a reactivar su afiliación al RPM y recibir los aportes trasladados. Adicional a lo anterior, solicita que si al momento del fallo el demandante acredita los requisitos para acceder a la pensión de vejez, **iv)**, se condene a Colpensiones al pago de esta desde su fecha de causación, junto con los intereses de mora sobre cada una de las mesadas pensionales adeudadas al momento de la emisión del fallo acorde al artículo 141 de la ley 100 de 1993, o en subsidio la indexación de las condenas. **v)** Lo ultra y extra petita; **vi)** Costas y agencias en derecho a cargo de las demandadas.

¹ Carpeta 01Primera Instancia; Archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 1/4.

De forma subsidiaria pretendió que se condene a Protección S.A. a reconocer a título de indemnización de perjuicios, como mesada pensional el valor equivalente a lo que hubiera recibido de permanecer en el RPM, una vez acredite los requisitos para ello.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 1 de mayo de 1958 e inició cotizaciones ante el Sistema General de Pensiones a través del RPM el 4 de febrero de 1974, hasta el 31 de marzo de 1995, reuniendo 911,57 semanas cotizadas. El 2 de marzo de 1995 suscribió formulario de afiliación al RAIS a través de Protección S.A., como consecuencia de una asesoría insuficiente, toda vez que no le brindaron información clara que le permitiera tener un contexto claro acerca de la liquidación final al momento de cumplir los requisitos para obtener su pensión, o a qué edad podría redimirse su bono pensional, ni los riesgos y beneficios que conllevaría afiliarse a dicho régimen, o las diferencias pensionales entre regímenes, ni mucho menos la posibilidad de regresar al ISS hoy Colpensiones antes de que faltaran 10 años para cumplir los requisitos legales para acceder a la prestación. En virtud de una proyección pensional de ambos regímenes, pudo evidenciar el actor que su mesada en el RPM en comparación con el RAIS tiene una diferencia exponencial, siendo notorio el detrimento en la mesada pensional obtenida con el RAIS.

En septiembre de 2017, elevó peticiones ante Protección S.A y Colpensiones, solicitando la anulación a la afiliación al RAIS y aceptar su regreso al RPM, peticiones que fueron negadas por ambas entidades.

Oposición a las pretensiones de la demanda

Quienes conforman la pasiva, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

i) Colpensiones²

Afirma que el demandante se trasladó al RAIS en ejercicio del principio de la libre escogencia de régimen pensional, sin haberse retractado de dicha selección dentro del término legal para ello, estando imposibilitado para retornar por faltarle menos e 10 años para cumplir el requisito de edad para acceder a la pensión de vejez. Excepcionó: inexistencia de aceptar el traslado del demandante a Colpensiones, imposibilidad jurídica de cumplir con las obligaciones pretendidas, buena fe, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

ii) Protección S.A.³

El acto de afiliación es existente, válido y exento de vicios, se realizó atendiendo los lineamientos legales vigentes para la época en que se suscribió el formulario de afiliación, donde el afiliado manifestó su voluntad de pertenecer al RAIS al plasmar su firma allí, previa asesoría brindada de manera completa, clara y comprensible sobre las características del régimen, generando derechos y obligaciones para ambas partes; además el afiliado tuvo varias oportunidades de retornar al RPM sin que hiciera uso de su facultad, no siendo de recibo que tras permanecer 20 años en el régimen pretenda

² Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 109/115.

³ Carpeta 01PrimerInstancia; Archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 126/145

invalidar un acto totalmente eficaz. En consecuencia, no existe ningún motivo legal o fáctico para proceder con la ineficacia alegada y no se puede acceder a ella por simples expectativas económicas. Tampoco se configuran los presupuestos para el perjuicio o daño que alega sufrió la demandante, puesto que no existió, ni se encuentra acreditado por la activa. Afirmo además que la acción pretendida se encuentra prescrita por no versar sobre los derechos pensionales de la demandante. Excepcionó: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, indebida acumulación de pretensiones, falta del juramento estimatorio de perjuicios como requisito procesal, y la que llamó innominada o genérica.

Sentencia de primera instancia⁴

El 19 de enero de 2022, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia declarando la ineficacia del traslado que realizó el demandante hacia al RAIS. Ordenó a Protección S.A. a trasladar a Colpensiones, el monto de capital ahorrado, incluidos rendimientos financieros, cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora con sus frutos e intereses, y lo descontado para garantía de pensión mínima, gastos o cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora, debidamente indexada al momento de su depósito ante Colpensiones. Advirtió que si la sumatoria de estos conceptos a trasladar resultare inferior al valor total del aporte legal correspondiente más los rendimientos generados en caso de que el actor hubiese permanecido en el RPM, será Protección S.A quien asuma la diferencia que arrojará con relación al tiempo de afiliación del actor. Ordenó a Protección a entregar las referidas sumas dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de lo decidido, y a Colpensiones a recibir tales valores e incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral del demandante, imputadas a los periodos cotizados en el RAIS y de acuerdo al IBC reportado, teniéndola como válidas para el reconocimiento de las prestaciones.

Declaró causado el derecho pensional del demandante bajo el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 2003 en su artículo noveno, condenando así a Colpensiones al reconocimiento y pago de la prestación, advirtiendo que el disfrute quedará sujeto al retiro del servicio y desafiliación del sistema general de pensiones. Declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios frente a Colpensiones, absolvió a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra y condenó en costas a Protección S.A., fijando agencias en derecho en la suma equivalente a \$1'000.000 pesos en favor del demandante.

Para fundamentar lo decidido, la juez de primera instancia acudió al precedente judicial vigente en la materia y señaló que, a Protección S.A., le correspondía demostrar el cumplimiento de su deber de información en forma eficiente, eficaz, completa, oportuna y comprensible antes de la suscripción del formulario de afiliación, carga probatoria que no satisfizo con el interrogatorio de parte, ni con los documentos aportados al proceso, declarando en consecuencia la ineficacia de traslado de régimen pensional. Y encontró acreditados a cabalidad los requisitos pensionales legales previstos en la ley 100 de 1993 en su artículo 33 por parte del demandante, declarando el derecho pensional del actor, por

⁴ Carpeta01PrimeraInstancia; archivo 08ActaArt80CPTSS2018-00286(2).pdf

contar con los 62 años cumplidos desde el 1 de mayo de 2020 y con un total de 1.961 cotizadas al 2018.

Recurso de apelación:

i) Protección S.A. Inconforme parcialmente con lo decidido en sentencia formuló recurso de apelación deprecando se revoque lo relativo a la condena de traslado de comisión de administración y primas de seguros previsionales, argumentando que la Juez A Quo no tuvo en cuenta que la AFP no se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se formularon excepciones frente la devolución de tales conceptos, pues su descuento se realizó como consecuencia de una disposición legal y que ya fueron pagados durante la administración de la cuenta de ahorro individual del demandante; así, en el hipotético caso de concluir que Protección S.A. no realizó su gestión de administración, la devolución de operar respecto de los rendimientos generados durante la afiliación del actor, pero al estar probada la buena gestión de la entidad con los buenos rendimientos generados, solo debe devolverse los aportes sin rendimientos, Adicionalmente, en caso de declararse una nulidad o ineficacia de traslado, la consecuencia jurídica es devolver las cosas a su estado anterior, razón por la cual solo se debe trasladar lo que se encuentre acreditado al momento de tal declaración en la cuenta de ahorro individual del actos, sin los rendimientos generados pues son exclusivos del RAIS y si hubiese estado todo este tiempo afiliado al RPM los mismos no se habrían causado. En torno a las primas de seguro previsional, estos montos fueron pagados mes a mes a las aseguradoras, quienes son terceros de buena fe, que nada tienen que ver con el acto declarado ineficaz, razón por la cual no se puede solicitar su devolución.

Finalmente, refiere inconformidad por la condena en costas impuestas a la entidad, puesto que la juez A Quo tampoco tuvo en cuenta abstenerse de la misma, en tanto la AFP no podría prevenir el presente proceso al ser el demandante beneficiario del régimen de transición, actuando conforme lo permitido por ley, que era conciliar para dar por terminado el proceso, lo cual no se logró por la mala fe de Colpensiones quien no concilió con tal de tener la devolución de las cuotas de administración y que la juez de instancia tampoco estudió.

ii) Colpensiones. Solicita se adicione al fallo en concordancia con el principio de estabilidad y sostenibilidad financieras de la seguridad social, se especifique la rentabilidad que generó los recursos solicitados, correspondientes al RAIS sin aplicarle la rentabilidad del RPM, en concordancia con los artículos 280 y 384 del Código General del Proceso, buscando así una condena en concreto. Y con relación a la causación de la pensión de vejez, estudiar el tema, pues se tiene que el actor es servidor publico y es otro régimen que debería aplicársele. Finalmente, solicita no ser condenada en costas.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Otorgada la oportunidad procesal pertinente para las partes alegar de conclusión en esta sede, solo la parte demandante⁵ y Colpensiones⁶ alegaron así:

i) Parte demandante: solicita se confirme en su totalidad el fallo proferido en la primera instancia en virtud a que la AFP no le brindó una asesoría clara, completa y eficiente que

⁵ Carpeta 02SegundaInstancia; archivo 05AlegatosDemandante.pdf

⁶ Carpeta 02SegundaInstancia; archivo 06AlegatosColpensiones.pdf

le permitiera tomar decisiones conscientes sobre las consecuencias que tendría su futuro pensional trasgrediendo el deber de asesoría e información del demandante. Y con base al derecho pensional concedido, se confirme pues el demandante ya cumple con los requisitos legales para acceder a dicha prestación económica.

ii) Colpensiones: deprecia se modifique la sentencia proferida, en razón a que la parte actora no logró acreditar los supuestos facticos y jurídicos para la declaratoria de ineficacia de traslado al RAIS, pues la carga dinámica de la prueba se ha depositado en cabeza de los fondos de pensiones, para que desvirtúen lo sustentado por la parte activa debido a la insuficiencia de información brindada al momento de los traslados, exigencia probatoria que no es acreditada pues los fondos solo cuentan con los formularios, ya que era lo que se exigía legalmente en la época, llevando que estas decisiones judiciales atenten contra los intereses de Colpensiones de manera colateral, ya que las decisiones favorables a los demandantes viola directamente la Carta Política y desconoce el principio de sostenibilidad financiera, pues la declaración injustificada de una ineficacia atenta contra la seguridad social de los demás afiliados, ya que tienen un gran impacto fiscal, y personas que no contribuyeron a su formación llegan a último momento a lucrarse de un ahorro comunitario. Además, no es justo, que estas cargas probatorias se exijan entendiendo que los parámetros legales consagrados en la época para estos tramites no es el mismo de la actualidad y ha venido desarrollando varias etapas. Sin embargo, en caso de que se confirme el fallo dictado por al A-quo, se ordene la devolución a Colpensiones la totalidad de los valores que haya recibido de cara a la afiliación del demandante, tal como recursos de la cuenta de ahorro, cuotas abonadas al fondo de garantía de pensión mínima, rendimientos, anulación de bonos pensionales, pago de seguros previsionales, gastos de administración, cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales a las aseguradoras con sus respectivos frutos e intereses, adicionando así que si la sumatoria de tales conceptos resulta inferior al valor total del aporte legal, Protección S.A asuma la diferencia que resulte, y esto sea debidamente indexado. Y en razón a la condena en costas, la misma no tiene soporte pues han obrado de buena fe, y tampoco hay lugar a una condena en segunda instancia, pues se está solicitando una adición al fallo proferido, que, en caso de salir desfavorable, será concreta con el principio de estabilidad financiera del SGP.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS; de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias de dicha declaración, como el que su afiliación al RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben trasladarse desde la AFP del RAIS hacia Colpensiones. Y, por último, **c)** se analizará el subsiguiente reconocimiento de la pensión de vejez.

Lo anterior, dado que el fundamento fáctico de las pretensiones de la demanda es el incumplimiento del deber legal de información por parte de las administradoras, lo que al tenor del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, ocasionaría no la nulidad, si no la ineficacia del acto jurídico.

Hechos relevantes acreditados documentalmente

Jorge Alonso Solorzano Sánchez nació el 1° de mayo 1958⁷. Inicialmente se afilió al extinto ISS el 4 de febrero de 1974⁸. El 2 de marzo de 1995 suscribió traslado con destino a Protección S. A.⁹. Para el 3 de julio de 2018 contaba con 1.961 semanas cotizadas en toda su vida laboral, de las cuales 908,29 lo fueron ante Colpensiones¹⁰. El 28 de septiembre de 2017¹¹ elevó petición a Protección S.A, solicitando la declaración de ineficacia de su traslado al RAIS, petición que fue resuelta por la entidad el 23 de octubre¹² de la misma anualidad negando sus peticiones. El 29 de septiembre de 2017 solicitó a Colpensiones.¹³, entre otros, aceptar su traslado al RPM, la cual fue resuelta negativamente el 17 de octubre del mismo año¹⁴, argumentando su traslado se efectuó bajo el principio de la libre escogencia de régimen consagrado en la ley 100 de 1993.

a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS.

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte del demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

i) Los artículos 48, 53, 335¹⁵ y demás normas concordantes de la Constitución Política; ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1¹⁶, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656 de 1994¹⁷; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su

⁷ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 23/25; y archivo 05ExpedienteAdministrativo GEN-ANX-C1-2017_10330609-20170929085125.pdf Pág. 2

⁸ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 27, 198/201; y archivo 05ExpedienteAdministrativo GRP-SCH-HL66554443332211_1242-20180608120518.pdf

⁹ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 26 y 151, 155.

¹⁰ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 161/168, 198/202

¹¹ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 40/41

¹² Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 42/47

¹³ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 48; y archivo 05ExpedienteAdministrativo GEN-ANX-C1-2017_10330609-20170929085125.pdf, y SAC-COM-AF-2017_10330609-20170929085125.pdf

¹⁴ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 49/50; y archivo 05ExpedienteAdministrativo GEN-RES-CO-2017_10330609-20171027045624.pdf

¹⁵ Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, debido a la función que desempeñan.

¹⁶ Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

¹⁷ Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones

literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas¹⁸ para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994¹⁹.

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, de *“suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen”*. No pudiéndose predicar como sostiene la pasiva, ni la Superintendencia Financiera que, la existencia del deber de asesoría, solo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte esa alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de Régimen esté precedida de toda información relevante que el Fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual, debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que le conllevaría dejar el anterior Régimen y sus posibles consecuencias futuras. Pues, conforme al Estatuto Financiero de la época en los Artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. y,

entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

¹⁸ **Se les prohíbe: “No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.**

¹⁹ Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP, respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información al afiliado.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, enfatizando en la necesidad de demostrar en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliado, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688-2019 y 373 de 2020, que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir requisitos para pensionarse, “dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.”

Por estas razones, lo argumentado por la pasiva en torno a que la suscripción del formulario acredita la libre, voluntaria e informada manifestación de voluntad del afiliado al momento del traslado o que debe desatenderse la línea jurisprudencial en materia de carga probatoria en asuntos como el que nos ocupa, no constituyen razones atendibles para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a la Administradora, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud de los traslados; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que el mismo estuviese precedido de la satisfacción del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó al afiliado, quien, según sus dichos al absolver el interrogatorio de parte, no recibió asesoría previo a suscribir el traslado.

No son admisibles los argumentos expresados por Protección S.A., en cuanto a que, al momento del traslado, éste obedeció a una decisión espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley; se satisfizo el deber de información en los términos exigidos para entonces; situación que tampoco acreditó, limitándose a afirmar que así había ocurrido. El que asevere que han hecho campañas masivas para educar al consumidor financiero y comunicados de prensa informando los cambios normativos o que el deber de información no fue obligatorio si no desde la expedición de la Circular 016 de 2016 o que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones que surgieron en 2010

y 2014, puesto que a la actividad misma de la administradora demandada subyace la obligación desde la creación misma del régimen pensional, de ilustrar suficientemente al potencial afiliado sobre las condiciones de ambos regímenes, su funcionamiento y expectativas, de manera que cada persona adopte una decisión informada y consciente sobre su futuro pensional

No pudiéndose aplicar tampoco, al aquí demandante la regulación de 2010 sobre deber del consumidor financiero, por cuanto su traslado se firmó en 1995 cuando no existía esa disposición, pero sí estaba vigente y se ha consolidado la que ha obligado a las AFP a brindar la información no bastando con la suscripción del formulario de afiliación, por cuanto su uso, no exime, ni avala la omisión de los deberes impuestos por las leyes a las AFP, y por tanto, se reitera, que previo a la suscripción de ese formulario, éstas entidades deben en un acto responsable y comprometido con su función social, dar a conocer a los potenciales afiliados, todas las implicaciones del traslado, como sostuvo la Corte en **sentencia SL 4360 de 2019** Radicado 68852.

Sobre la carga dinámica de la prueba, ha de indicarse que ésta radica en cabeza de las AFP que a través de sus agentes propiciaron el traslado de régimen del asegurado, tal y como se aprecia en la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrarlo, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado, además, de estar facultado el fallador por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y en asuntos como el que hoy nos ocupa, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, por cuanto: i) Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se le haya entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; ii) Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y posibilitó que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

En el sublite, mediante la prueba documental arribada, se evidencia que Jorge Alonso Solorzano Sánchez nació el 1 de mayo de 1958²⁰, por lo que, al 01 de abril 1994, cuando inició vigencia el SGSSP para él, tenía 35 años, y no tenía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones²¹, por lo que nunca fue beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El 2 de marzo de 1995 suscribió traslado con destino a Protección S.A.²², el cual se acusa de ineficaz. En el mes de septiembre de 2017 solicitó

²⁰Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 23/25; y archivo 05ExpedienteAdministrativo GEN-ANX-C1-2017_10330609-20170929085125.pdf Pág. 2

²¹Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 05ExpedienteAdministrativo GRP-SHC-HL66554443332211.pdf. Para el 31 de mayo de 1994 el demandante contaba con 4.781 días de cotización equivalentes a 683 semanas.

²² Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 26 y 151, 155.

a Protección S.A.²³ y a Colpensiones²⁴ anular su traslado al RAIS y regresar al Régimen de Prima Media, peticiones que fueron despachadas desfavorablemente por ambas entidades.

Igualmente fue recaudado interrogatorio al demandante, sin que se produjera confesión de su parte, pues en torno a las condiciones presentadas durante su traslado hacia el RAIS, manifestó que se trasladó a Protección S.A. pues en 1995 les brindaron una asesoría grupal a aproximadamente 60 u 80 personas incluido él, que duró alrededor de media hora; recuerda que le indicaron que el traslado implicaría una mejora en su calidad e vida, y además que el ISS se acabaría, sin embargo no recuerda información adicional a ello, a excepción de preguntas que le hicieron en relación a la edad de su esposa e hijos. Afirma que recibió una re-asesoría en el 2010 en las oficinas de Protección en el poblado, pero no recuerda mucho, pero recalca que nunca le informaron del derecho al retracto.

Protección S.A. no aportó elemento de convicción donde se demuestre la asesoría que dice haber brindado al señor Solorzano Sánchez, en momento anterior a la suscripción del formulario de afiliación; siendo esta AFP quien se encargó de tramitar el traslado de régimen pensional, es la llamada a demostrar que ese traslado de régimen no se vio afectado en su eficacia al suministrar la información suficiente, clara, completa a la entonces potencial afiliada, pero se abstuvo de presentar prueba en ese sentido.

En este caso, la pasiva no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar al hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en el posible afiliado, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

De ello no hay elementos de convicción en el plenario distintos del formulario de afiliación en ésta, sobre el cual la AFP Protección S.A. adujo que, estando suscrito por la demandante, quien lo hizo de manera libre y voluntaria, no es dable restarle valor y menos desconocer este acto; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los

²³ Carpeta 01PrimeraInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 40/47 42/50; archivo 05ExpedienteAdministrativo GEN-ANX-C1-2017_10330609-20170929085125.pdf, SAC-COM-AF-2017_10330609-20170929085125.pdf y, GEN-RES-CO-2017_10330609-20171027045624.pdf.

términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados en los que se limita a llenar espacios en blanco, que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Los considerandos de esta providencia también sustentan que los actos del demandante posteriores al traslado, como su prolongado silencio, o el sufragar aportes, fueren indicadores de su intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, debiendo recordarse el reiterado precedente de la Sala de Casación Laboral, según el cual, el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de traslado se encamina a establecer si, con anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumplió el tantas veces nombrado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar, pues** la jurisprudencia del órgano de cierre en materia de seguridad social ha dilucidado de manera uniforme que, si la debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto de traslado, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**), y adicionalmente, esa falta de información en esta materia, no se convalida por los traslados de administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199- 2021).

De ahí que, no procede adoptar el criterio aislado contenido en la providencia **SL2440-2021**²⁵, donde una de las Salas de Descongestión de la CSJ., expuso la tesis de los llamados “actos de relacionamiento,” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de permanencia del afiliado en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Conforme al precedente en cita, acogido por esta Sala, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de Protección S.A., vulneradora de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley 100 de 1993²⁶ genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como

²⁵ por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral

²⁶ **13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier

repuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal y ello implica que, el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado en **sentencia SL4360 de 2019**, concluyendo en que: “la sanción impuesta en el artículo 271²⁷ de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado”, lo cual, da lugar a garantizar el derecho del accionante a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES y a declarar que ha permanecido afiliada, sin solución de continuidad, lo que conlleva a la reactivación de su respectiva afiliación en este último régimen.

Tales motivaciones permiten **confirmar** en ese aspecto la sentencia conocida en apelación.

b) Consecuencias económicas de la declaratoria de ineficacia

Atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente se garantice la no afectación financiera del régimen de prima media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos recibidos con motivo de la afiliación al régimen de Ahorro Individual, deben trasladarse a la administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto, tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además de ser menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso, la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información garantice que el patrimonio de la persona inducida a la afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él, como ha dilucidado el precedente jurisprudencial de la H CSJ en SCL., que esta Sala acoge.

Bajo las referidas premisas, se **confirmarán, modificarán y adicionarán** las órdenes impartidas a **PROTECCIÓN S.A.** desde la primera instancia, en el sentido que ésta AFP del RAIS, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, no solo debe trasladar a COLPENSIONES **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros que se han generado durante todo el tiempo en que el hoy demandante figuró como afiliado al RAIS.

persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

²⁷ El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud¹ en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.

Y además para resolver lo apelado por la pasiva, se advierte que **Protección S.A., también debe trasladar a la referida AFP del RPM, las cuotas de administración, el dinero con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras**, por ella descontadas durante el periodo de afiliación del hoy demandante, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni, si el dinero del afiliado fue administrado adecuada y eficientemente, sino que, como consecuencia de la ineficacia del traslado inicial al RAIS, y por no haberse estudiado previamente a la afiliación de la situación particular del hoy demandante, e ignorándose verdaderamente cuáles fueron los argumentos esgrimidos por dicha AFP para aseverar que cumplió con los deberes de información que sostiene haberle dado, no es pertinente exonerarla de la devolución de tales conceptos, independientemente de que Colpensiones no haya administrado el dinero del afiliado, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva, no pudiendo discutir inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para Colpensiones y el demandante, tampoco transgrede derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración del accionante hacia el RAIS y dentro de ese mismo régimen, pues si bien existió una administración por parte de la AFP del RAIS, además del pago de seguros, consecuencialmente a la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor del hoy demandante, como anteriormente se explicó.

Se rememora que, para efecto de la devolución de conceptos hacia el RPM, con anterioridad, esta Sala de Decisión disponía que, el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 de 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM, **y de otro lado**, y se abstenía de ordenar que las AFP del RAIS remitieran con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, tema que forma parte del recurso de apelación, ante las órdenes impartidas en la primera instancia que aquí se confirma.

Pero, retomando el punto, y por las mismas razones expuestas en este acápite, considerando el precedente de la Sala de Casación Laboral²⁸ contenido en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021**, esta Sala ha precisado que las cuotas de administración y los descuentos del seguro previsional, descontadas por la AFP del RAIS durante el periodo de afiliación de hoy demandante en ella, se deben trasladar debidamente **indexadas** y con cargo a sus propios recursos, aspecto en el cual, se adicionará la decisión de instancia, con el fin de

²⁸ Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil, en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a Colfondos S.A., que traslade a Colpensiones, los valores descontados a la demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto de aportes para la Garantía de Pensión Mínima, y con cargo a sus propios recursos, sumas adicionales de las aseguradoras, además de las comisiones de administración.

que se satisfagan en su valor actualizado, dado que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana constituye un hecho notorio.

Al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PROTECCIÓN S.A. sin trasladar consecuencias negativas al actor.

Se ordenará a COLPENSIONES recibir de PROTECCIÓN S.A. los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el régimen de prima media las semanas cotizadas por el actor durante su afiliación en el RAIS.

Así las cosas, se **confirmará, modificará y adicionará** la sentencia conocida en apelación

c) Resuelto el primer problema jurídico, se aborda ahora el derecho pensional pretendido:

Norma aplicable

Para determinar si el hoy demandante consolidó o no el derecho pensional deprecado, se consideran los siguientes elementos fácticos y jurídicos: el actor nació el 1 de mayo de 1958²⁹, por lo que al 1° de abril de 1995, cuando inició vigencia el SGSSP por ser trabajador dependiente, contaba con 35 años de edad y contaba con 683 semanas de cotización, por lo que no fue beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siendo procedente analizar su prestación de vejez con base en la Ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003.

Respecto a la causación y disfrute de la prestación, cabe precisar que el actor cumplió los 62 años de edad el 1° de mayo de 2020 y al 3 de julio de 2018 de contaba con 1.961 semanas de cotización en toda su vida laboral³⁰, por lo que el actor causó su derecho a la pensión de vejez el día que cumplió con ambos requisitos al arribar a la edad de 62 años y arribar a la densidad de semanas mínima exigida. Sin embargo, con la documental aportada no es posible concluir que hubiera realizado su retiro del servicio, quien además en interrogatorio de parte recaudado en primera instancia en audiencia celebrada el 19 de enero de 2022, aceptó estar activo al servicio del Municipio de La Estrella, en consecuencia, no es dable conceder el disfrute de dicha prestación por no estar acreditado el retiro del servicio³¹.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acertada la posición del A Quo, contrario a lo afirmado por el apoderado de Colpensiones en su recurso de apelación, debiéndose **confirmar** la

²⁹ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 23/25; y archivo 05ExpedienteAdministrativo GEN-ANX-C1-2017_10330609-20170929085125.pdf Pág. 2

³⁰ Carpeta 01PrimerInstancia; archivo 03ExpedienteCompleto05001310501020180028600.pdf Págs. 161/168, 198/202

³¹ Según el mandato contenido en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 sobre racionalización del gasto público, norma posterior a la Ley 100 de 1993, impone al servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación, optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio hasta que cumpla la edad de retiro forzoso; y dispone que la asignación pensional se empieza a pagar después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.

sentencia en este aspecto, y **adicionarla** en torno a indicar los parámetros de la liquidación de la prestación, a fin de que Colpensiones al momento de reconocer la prestación cuantifique el IBL teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 21 y 34 -modificado por el art.10 de la Ley 797 de 2003 de la Ley 100 de 1993.

III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae y el reconocimiento pensional se presentó como una de las consecuencias del retorno al RPM administrado por Colpensiones, además esta Sala, acoge la postura pacífica de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

IV. COSTAS

Para resolver lo apelado por Protección S.A. respecto a la condena en costas impuesta, ha de indicarse que ésta deviene acertada por haber sido quien promovió el traslado del demandante al RAIS sin haber cumplido con su deber de información, no evidenciando mala fe de Colpensiones al no emitir concepto favorable de conciliación, si se considera que en este proceso se analizaron los efectos del traslado realizado por la pretensora al fondo privado, obligando vincular al fondo público para hacerle oponible la declaración de ineficacia del traslado, la continuidad de afiliación en el RPM, administrado por este, y la obligación de recibir del RAIS los dineros que se ordena entregar, máxime que la entidad equivocadamente afirmó en su recurso de alzada, no haberse opuesto a las pretensiones de la demanda, cuando del escrito de contestación se evidencia una clara oposición a todas ellas.

Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A por haber resultado vencida en su recurso. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2022, y en favor del demandante. Lo anterior a tenor de lo dispuesto en el artículo 365 del CGP.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el 19 de enero de 2022, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por el señor **JORGE ALONSO SOLORIZANO SÁNCHEZ** contra

COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. **modificándola y adicionándola** en el sentido en que esta última:

Trasladará con destino a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la **totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que el demandante ha figurado como afiliado al RAIS, así como los valores descontados al actor por concepto de aportes para la garantía de pensión mínima, y con cargo a sus propios recursos, PROTECCIÓN S.A. trasladará debidamente indexados a Colpensiones el valor de comisiones de administración y primas de seguros, descontados en el mismo lapso, como afiliado ante ella.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PROTECCIÓN S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de PROTECCIÓN S.A. los valores correspondientes a los conceptos aludidos, y homologar en el régimen de prima media las semanas cotizadas por el actor durante su afiliación en el RAIS.

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral QUINTO de la sentencia, en el sentido de indicar que Colpensiones al momento de reconocer la prestación cuantificará el IBL teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 21 y 34 modificado por el art.10 de la Ley 797 de 2003 de la Ley 100 de 1993.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de PROTECCION S.A. Agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2022.

Se ordena notificar lo resuelto por edicto.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ
En ausencia justificada

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN